

América Latina: crisis del trabajo y nuevas formas de representación popular

◆ *José Miguel Candia*

Una aproximación al debate teórico

La discusión sobre las principales características de la actividad laboral en nuestros días reconoce, por lo menos, dos grandes perspectivas de análisis. Un enfoque señala, como vector explicativo del proceso de transformaciones que vive la humanidad, la tendencia que lleva a la inexorable extinción del trabajo. Por el contrario, la otra línea de análisis sostiene que pese a las evidencias empíricas disponibles no existen argumentos suficientemente sólidos como para afirmar que se avanza hacia la disolución de la sociedad del trabajo.

La primera de las concepciones mencionadas entiende que en pocas décadas más las actividades humanas directamente comprometidas con la transformación de la materia y la prestación de ciertos servicios básicos, serán piezas de museo. El universo habrá ingresado a un nuevo tiempo histórico, un ciclo civilizatorio dominado por el desarrollo descomunal del conocimiento informático y el predominio de la robótica en las tareas propiamente productivas. Será, entonces, el momento de administrar la generación y distribución de bienes y servicios y se vivirá el opacamiento de otras actividades que, como la política, se encuentran vinculadas al interés que una sociedad demuestra por definir

◆ Sociólogo, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México

proyectos, concertar voluntades y luchar por la construcción de un futuro que exprese el interés de las mayorías.

En estricto sentido, la preocupación por el futuro del trabajo humano no es nueva. El rasgo distintivo de estos tiempos es el interés y la jerarquía que adquirió esta línea temática en las instituciones académicas y la polarización con la cual se formulan las hipótesis centrales de las teorías que concurren en este debate. Es posible señalar, con propósitos ilustrativos, algunos de los principales momentos por los que atravesó el tratamiento de este tema. A mediados de la década de los cincuenta, hubo una oleada de optimismo que se extendió más allá de los espacios universitarios. Las primeras etapas de la automatización de los procesos productivos y la institucionalización de las relaciones obrero-patronales llevaron a pensar que se estaba en presencia de una *nueva clase obrera* (Mallet, 1972). La extensión de las prestaciones del “Estado Benefactor” se encargarían de neutralizar las propuestas más radicales de la izquierda marxista y las posibilidades de impulsar, sin mayores sobresaltos, el crecimiento de las economías capitalistas se mostraban como un camino cercano y abonado de certezas.

No obstante, algunos años después, a mitad de los años sesenta, la mayoría de los países industrializados vivieron un período de gran conflictividad social con fuerte protagonismo obrero y sindical (Braverman, 1974). Las visiones optimistas fueron reemplazadas por nuevas tesis que hablaban de la descalificación del trabajo, de una mayor enajenación obrera y de la necesidad de ensayar nuevas fórmulas administrativas que hicieran posible la instrumentación de esquemas de cogestión entre sindicatos y gerencias. A partir de los años ochenta, los cambios en las percepciones de la cuestión laboral serían aún más profundos. El debate se centró sobre tres ejes principales: a) ganó espacio la idea del agotamiento de la estrategia desarrollista de industrialización sustentada en los principios de la teoría keynesiana; b) se inició un proceso caracterizado por la reestructuración de los procesos productivos y del mercado laboral; c) el correlato ideológico-político de los cambios estructurales señalados fue la decadencia de los programas obreros, en particular los de inspiración socialdemócrata y comunista, en Europa, y de signo populista-distribucionista, en América Latina.

Estas transformaciones en el universo del trabajo y otras que también afectaron las relaciones entre empresarios, Estado y sindicatos marcaron de manera notoria, a partir de la década de los ochenta, las valoraciones académicas acerca de la gravitación del trabajo en la sociedad. Al ponerse en tela de juicio la importancia de la actividad laboral como eje articulador de la vida social, se

cuestionaban las teorías que habían estado vigentes hasta fines de los años setenta, acerca de la centralidad del trabajo en el conjunto de las relaciones sociales y del papel que la condición laboral había jugado como punto de referencia para la construcción de identidades colectivas (Habermas, 1984). En paralelo, las preocupaciones sobre el futuro del trabajo mudan de espacio y se trasladan a las temáticas que son propias de la sociología laboral. El análisis de las relaciones industriales y de las diversas formas de organización de la producción suplen a los anteriores estudios que interpretaban al movimiento obrero como fuerza social o expresión corporativa en una relación de subordinación o confrontación con el Estado. Un conjunto de investigaciones específicas trasladó el eje de sus preocupaciones al análisis de las formas y efectos de los cambios tecnológicos en las relaciones laborales, de los sistemas de relaciones industriales y sobre los encadenamientos productivos y los nuevos sistemas de organización del trabajo a partir de la crisis del paradigma ford-taylorista (Hyman y Streeck, 1988).

En la mayor parte de la producción académica de los años ochenta, se observa una notable disminución del tratamiento de la cuestión obrera –entendida como posible sujeto político– pero no del tema del trabajo como actividad transformadora de la materia y fuente generadora de riqueza (Katz y Sabel, 1985). En este clima de discusión y redefinición de prioridades, surgieron un conjunto de teorías entre las que cabe destacar el regulacionismo, el enfoque neoshumpeteriano y la denominada especialización flexible (Aglietta, 1982; Amin, 1994; Boyer, 1989; Lipietz, 1986; Pérez y Ominami, 1987; Sabel, 1985).

No obstante, si por un momento se hacen a un lado los fundamentos propiamente teóricos, es posible agrupar las posiciones de quienes abordan el estudio de la temática laboral en *optimistas* y *pesimistas*. Los primeros perciben en el cambio tecnológico y en los nuevos modelos de producción una alternativa cierta para arrancar del trabajo humano su carácter rutinario y enajenado y volverlo creativo, autocontrolado y generador de nuevas identidades (Handy, 1987). Con una visión menos alentadora, los *pesimistas* resaltan los efectos negativos que tienen sobre los trabajadores ciertos fenómenos como la mayor segmentación del mercado laboral, la propagación de formas ocupacionales no convencionales y la extensión del empleo precario. En paralelo, se identifican las nuevas corrientes de la administración del trabajo como expresiones de estrategias más sofisticadas orientadas a asegurar el control de las gerencias sobre la fuerza laboral (Hardt y Negri, 1994).

Casi al mismo tiempo en el cual la sociología del trabajo planteaba su “retorno” a la empresa y al estudio de los procesos productivos, se gestó un conjunto

de reflexiones que con énfasis variado, llegó a una conclusión común: la investigación debía centrarse en el reconocimiento de un dato fundante según el cual la humanidad había ingresado en un proceso histórico de ruptura con las formaciones sociales anteriores y este nuevo rumbo marcaba el *fin de la sociedad del trabajo* (Gorz, 1998; Offe, 1990; Monza, 2000). Algunas de las concepciones que aceptan este principio de carácter general, se formulan a partir de marcos teóricos con pretensiones explicativas de largo alcance, pero con escasa sustentación empírica (Antunes, 1999). Por este camino, suelen coincidir con ciertas postulaciones de las corrientes filosóficas *postmodernas* como es la noción del fin de las ideologías, la desarticulación de la vida social, la crisis de la política y la inviabilidad de los programas revolucionarios, así como la aceptación de que la economía capitalista constituye el último estadio del desarrollo humano. Dentro de esta corriente hay otros enfoques, de tono más ensayístico, que logran una buena descripción de las dificultades que encuentra un sujeto buscador de empleo para acceder a un trabajo estable. En este sentido, constituyen valiosos textos testimoniales sobre el desempleo y la subocupación creciente y, en particular, acerca de la imposibilidad de intentar revertir una tendencia histórica frente a la cual ya no existirían caminos alternativos después del fracaso del socialismo y de la creciente segmentación de la clase trabajadora.

Al margen de los autores que se consulten, esta idea rectora sobre el fin de la sociedad del trabajo se estructura a partir de un conjunto de argumentos comunes a todos ellos. Es posible identificar, por lo menos, cuatro tesis principales que abren espacios para la reflexión académica pero que ofrecen argumentos endebles para el estudio de la realidad laboral latinoamericana y la formulación de políticas de empleo útiles para nuestros países. Las tesis referidas son las que se enuncian a continuación:

a) El deterioro del empleo y de las condiciones generales de trabajo son la consecuencia de la derrota que sufrió el movimiento obrero en los años ochenta. Entre otras derivaciones el fracaso de los sindicatos en esta lucha facilitó el tránsito del “Estado Benefactor” al “Estado neoliberal”, posibilitó la reestructuración productiva y el repliegue de la participación obrera en el interior de las empresas en un contexto marcado por el desplazamiento de los conflictos obrero-patronales y por la centralidad que adquiere la disputa por los mercados (Jurgens, 1995).

b) Desde fines de los años setenta la industria ha perdido espacio dentro del conjunto de las actividades productivas con respecto a los servicios (Castells y

Aoyama, 1994). En paralelo, el crecimiento relativo de los trabajadores calificados —técnicos, profesionales, burócratas de cuello blanco— junto a la expansión de formas ocupacionales atípicas, de empleos precarios y del aumento de los espacios que ocupa la economía informal y el trabajo en micronegocios, han potenciado las tendencias que llevan a una profundización de la heterogeneidad del mercado laboral.

c) Si el trabajo ha perdido relevancia en las sociedades de fin de siglo, debe entenderse que el papel de la actividad laboral en la generación de valor es menos significativa (Méda, 1996; Castell, 1996). La riqueza social surgiría, ahora, de los movimientos que responden a un vasto sector financiero globalizado que no se expresa en sujetos o empresas con nombre y apellido, sino en el anonimato de organismos como grandes casas financieras, agentes responsables del movimiento de las acciones en los principales mercados del mundo y en los nuevos fondos de pensiones. Estas referencias ilustran la operación de un mundo del dinero que resulta casi inasible y en el que es difícil reconocer o personalizar sujetos a quienes demandar.

d) Desde una perspectiva sociológica, el fin del trabajo está asimilado a la pérdida de centralidad de la actividad laboral en el conjunto de relaciones sociales, de manera especial, como pivote en torno al cual se conforman las identidades colectivas. Al perder el papel relevante en la constitución de subjetividades, los individuos quedan en una situación que algunos autores definen como “fragmentación de los mundos de vida” (Offe, 1985). Los *espacios extralaborales* se han transformado en lugares de socialización más importantes para los trabajadores que los mismos ámbitos productivos.

La discusión sobre las condiciones actuales del mercado laboral y, en particular, el debate acerca de la no centralidad del mundo del trabajo con relación a otros espacios de la vida social se ha ido entrampando, de manera gradual, en los argumentos, diferentes, pero a nuestro juicio igualmente erróneos, de dos posiciones extremas. Uno de estos enfoques afirma que la humanidad está viviendo un proceso cuyo hilo conductor es el ingreso en la sociedad del “no trabajo”. La otra línea de análisis sostiene que, aun admitiendo la validez empírica de fenómenos como la incorporación de nuevas tecnologías, la crisis de los principios ford-tayloristas de administración del trabajo y la desregulación de los mecanismos de contratación, no hay elementos suficientes para pensar en la secundarización del mundo laboral. Desde esta perspectiva, es en el espacio productivo donde se establecen las prácticas colectivas que dan sentido al con-

junto de las relaciones sociales. Este mismo ámbito sería también el que actúa como fuente determinante para la formación de los referentes simbólicos populares y como espacio en el cual los individuos adquieren sentido de pertenencia con relación a un grupo social, étnico o cultural particular y se diferencian del resto de los integrantes de la sociedad.

Por nuestra parte entendemos que el trabajo sigue siendo un factor marcadamente constitutivo de la conciencia social y de las acciones colectivas, pero que se despliega en un contexto de mayor vinculación con elementos de naturaleza cultural, con cuestiones de carácter nacional o regional, con expresiones étnicas y religiosas y con movimientos que aglutinan a ciertos sectores de la población a partir de demandas que surgen de procesos fuertemente localizados (asociaciones barriales y organizaciones vecinales, entre otras) o que expresan a determinados segmentos de la población: agrupaciones feministas; movimientos juveniles o comunidades indígenas.

Composición del empleo: indicadores y tendencias

Es oportuno consignar ciertos datos sobre la situación laboral en algunos de nuestros países, antes de exponer la posición que aquí se sustenta, sobre el caso latinoamericano. Con el propósito de ilustrar el comportamiento del empleo en la región, no se hará referencia a variables o situaciones específicas que respondan a fenómenos particulares de alguno de los países del área. Los indicadores que se considerarán expresan tendencias de largo plazo más allá de los comportamientos sectoriales de la economía, de factores estacionales o de manifestaciones puntuales que involucren a alguna región geográfica en particular (OIT, 1996, 1997, 1998; Lindenboim, 1999).

De acuerdo a los reportes suministrados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hay una primera observación, que debe consignarse, y se refiere al incremento del empleo en el llamado sector informal de la economía, que continuó siendo dominante durante 1998. La ocupación en el sector moderno se estancó en el año mencionado, mientras que la generación de empleos en las microempresas creció el 4,5%. De esta manera, los datos referidos confirman una tendencia sostenida que demuestra la participación creciente de la ocupación en pequeñas unidades productivas y en micronegocios familiares. La participación del sector informal en el empleo total continuó aumentando del

57,7%, en 1997, al 58,7%, en 1998. Es conveniente señalar que bajo una misma categoría –la de empleo informal o sector no estructurado de acuerdo a la definición que acuñó la OIT– se están agrupando personas que desarrollan actividades como trabajadores por cuenta propia, sujetos que laboran sin remuneraciones y que pueden identificarse como “trabajo familiar no retribuido” y un tercer grupo de gente que recibe un salario como empleado de microunidades productivas. Este vasto sector que abarca casi el 60% de la población activa ocupada desarrolla sus actividades laborales en un nicho de la economía donde las prestaciones, los apoyos de la seguridad social y la sindicalización de los trabajadores son casi nulas.

Al final de este artículo, se anexa un cuadro en el cual se desagrega la importancia del empleo “no agrícola” en la economía informal y en el sector estructurado para un grupo seleccionado de trece países de la región. Las referencias muestran la gravitación, cada vez más importante, de las actividades productivas “no estructuradas” en el período 1990-1996, así como el crecimiento de los microestablecimientos. Este último indicador es por demás significativo, ya que en este tipo de pequeñas y microempresas se agrupa buena parte del empleo precario y se registra la ausencia de cobertura social, el mayor peso del trabajo familiar no remunerado y la desprotección jurídica de la mano de obra.

Los datos que se comentan son ilustrativos de una realidad laboral generalizada en los capitalismo periféricos: el empleo asalariado convencional, pese a ocupar un lugar relevante en el sector moderno de la economía, no es la modalidad dominante. La mayoría de quienes trabajan lo hacen por su cuenta en calidad de pequeños productores del campo, personas ocupadas en micronegocios de la ciudad, tareas domiciliarias pagadas a destajo, o viven de los ingresos de actividades ocasionales que suelen ser intermitentes o responden a comportamientos estacionales. El trabajo asalariado bajo regulación contractual está al alcance de una franja relativamente minoritaria de la población ocupada o de quienes presionan en el mercado laboral por obtener un trabajo de esa naturaleza.

Por último, es oportuno enfatizar que el estancamiento o la disminución del empleo industrial y el crecimiento de la fuerza laboral en el área de servicios, son factores que han contribuido a reducir la base social de los sindicatos y acotar el accionar político de los mismos. Conviene reiterar que, aun sin presentar un comportamiento homogéneo y con variantes significativas de un país a otro, el porcentaje de población asalariada ha disminuido con respecto al total

de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada. De igual forma, también ha caído el volumen de trabajadores que desempeñan sus labores amparados por convenios colectivos, al expandirse la desregulación de los mercados y difundirse la aplicación de criterios flexibles de organización de la producción.

Identidades colectivas y prácticas sociales

Los factores que se describen en el apartado anterior modifican radicalmente el contexto previo caracterizado por el crecimiento del empleo formal, la organización corporativa de la sociedad y la promulgación de cuerpos legales tutelares. Estos elementos hicieron posible la conformación de grandes sindicatos por rama de actividad, así como la consolidación de fuertes centrales obreras. La aparición de movimientos “nacionalistas-populares” en países como Argentina, México, Perú y Brasil, entre otros, guarda relación con el surgimiento de un importante núcleo de trabajadores urbanos atraídos por el pujante proceso de industrialización que vivieron algunas economías latinoamericanas a partir de la década del treinta y hasta mediados de los años setenta. En otras experiencias nacionales, se registró la consolidación de un fuerte proletariado industrial en actividades extractivas, como las minas de estaño en Bolivia, lo que explica el marcado protagonismo sindical en las luchas sociales de ese país (Touraine, 1989).

Acerca de esta relación entre estructura y formación de identidades políticas y culturales, es conveniente señalar que no existen relaciones de carácter “unicausal” que puedan explicar este complejo proceso de construcción de subjetividades, acciones colectivas y prácticas sociales. Cierta determinismo vulgar – de origen estructuralista– cayó en el error de atribuir a la posición que los sujetos ocupan en el mercado laboral, la capacidad de perfilar –linealmente– valores, normas y actitudes. Desde esta perspectiva, no llega a apreciarse que las relaciones entre estructuras y subjetividades forman un conjunto heterogéneo de variables que interactúan en un proceso dinámico de condicionamientos mutuos. Sobre esta afirmación, cabe una salvedad que haga explícita la posición que se sostiene en este trabajo. La crítica a los determinantes estructurales ha generado, como contrapartida, la difusión de una posición ecléctica en la que se juxtaponen variables de diversa significación y relevancia. Desde este enfoque, se diluyen aquellos factores de la realidad social que tienen un poder constituti-

vo con respecto a otros que actúan como “identidades leves”. No es nuestra intención suscribir una concepción de esta naturaleza que termina por disolver la realidad en una nube de elementos interactuantes, difíciles de identificar y con una misma jerarquía constitutiva sobre el universo cultural, político o ideológico que elaboran o asumen los actores sociales.

Conviene incorporar aquí otro señalamiento que contribuye a definir la posición que inspira este ensayo. Entendemos que se corren riesgos similares a los mencionados en párrafos anteriores, cuando desde otras posiciones teóricas se afirma que existe un hilo rojo que le da continuidad a la historia del movimiento obrero y de las clases subalternas. Si fuese cierto que la heterogeneidad de los sectores trabajadores de la sociedad es un rasgo que, además de ser constitutivo —es decir reconocible desde los orígenes de la revolución industrial hasta nuestros días— ha operado a lo largo de la historia *sin cambios cualitativos sustanciales*, no habría necesidad de reformular antiguos paradigmas o buscar marcos conceptuales novedosos para analizar el comportamiento de los sectores populares y de los movimientos de protesta social.

Sobre este aspecto del análisis y con relación a las hipótesis desde las cuales se aborda el desarrollo de este ensayo, es necesario consignar los siguientes puntos de partida:

a) Las ideologías contestatarias, las formulaciones macro-teóricas desde las cuales se pretendía explicar la realidad social, así como el atractivo y la difusión de los “grandes relatos” que procuraban expresar los intereses de los pobres de la tierra, han quedado en entredicho desde el momento en que el derrumbe de los llamados “socialismos reales” puso en tela de juicio algunos de los soportes sobre los que se sustenta la concepción marxista de la historia.

b) Las articulaciones parciales, que vinculan a los agentes sociales y dan sentido a las acciones colectivas, adquieren una significación mayor y sustituyen a la anterior noción de un “todo articulado”, concepto a partir del cual se fueron construyendo buena parte de las ciencias sociales. El concepto de articulación parcial no disminuye la relevancia de la actividad laboral pero es un principio conceptual que facilita la identificación de otras variables que pueden actuar como elementos de inclusión o de exclusión entre diversos grupos sociales (religión; usos y costumbres; tradiciones culturales; pertenencias regionales o nacionalidad; comunidades étnicas).

c) La formación de identidades y subjetividades colectivas empieza a reconocer en los espacios extralaborales y en las experiencias “moleculares” de la

vida cotidiana elementos constitutivos cada vez más determinantes de ciertos comportamientos y actitudes. También estos factores son motivo de agrupamientos, de reconocimientos y apoyos mutuos, en algunos casos, o por el contrario, actúan como elemento de exclusión y beligerancia para diversos grupos sociales.

Identificar y ponderar adecuadamente las relaciones entre los condicionantes económicos y la práctica social de los grupos o sujetos considerados individualmente ha sido una de las mayores dificultades teóricas que deben afrontar los investigadores dedicados al tema. Los primeros estudios sobre acciones colectivas pusieron el acento en el carácter *societal* de estos fenómenos. Las señas de identidad más relevantes de estos movimientos eran dos: su procedencia, haber surgido de la sociedad civil y recorrer caminos no institucionales, o expresarse bajo formas no convencionales, es decir, al margen de los sindicatos, partidos políticos tradicionales y organismos para-estatales de diverso tipo. De esta manera, los investigadores enfatizaban las formas en que estos movimientos de protesta aparecían enraizados en las condiciones de vida cotidiana de los grupos y sectores que los alimentaban y eran protagonistas de los mismos.

La posición que se sustenta en este artículo afirma que la *vinculación entre las estructuras productivas y los fenómenos de organización y movilización social está mediada por la política*. Cuando el proceso de reestructuración capitalista divide a los sectores populares y debilita antiguas identidades culturales o partidarias, no lo hace de forma mecánica, sino por las mediaciones que establecen las políticas públicas. De igual manera, la desarticulación de un segmento importante del aparato productivo no genera la unidad de los excluidos, de los pobres y de quienes son condenados al desempleo. La confluencia de los grupos sociales que son víctimas de la modernización capitalista se procesa a través de decisiones políticas que comprometen a vastos contingentes de la población. Para que la voluntad unitaria resulte significativa, debe expresarse en propuestas incluyentes, que articulen y canalicen las demandas de los grupos sociales que se movilizan en busca de nuevas formas de participación y gestión popular.

Nuevas formas de representación popular: la política como práctica autogestiva

por casualidad el tema cobró auge cuando declinaron, en el mundo académico y en el espacio de la política, un conjunto de principios que le habían dado congruencia al universo de certezas sobre las cuales se levantó y ganó legitimidad el pensamiento crítico. Ciertos postulados, recurrentes en las ciencias sociales, quedaron en medio del fuego cruzado de impugnaciones que nacían, en parte, de un fenómeno político que alteró los parámetros a partir de los cuales se analizaba el mundo de los hombres y la naturaleza de los Estados: el colapso del “socialismo real” en la Europa del Este y el fuerte protagonismo de movimientos sociales de nuevo tipo. Sin embargo, no puede ignorarse que ese torrente de opiniones cuestionadoras había sido alimentado por un debate que antecedió al derrumbe del bloque soviético y que tuvo en el terreno de la teoría sus manifestaciones más significativas. Durante los años setenta, la discusión ya había alcanzado a conceptos que eran verdaderos puntales para las corrientes marxistas de las ciencias sociales. Entre otras cuestiones teóricas, el debate incluyó la reinterpretación de la categoría clase social, que en la literatura clásica explicó el proletariado como fuente generadora de riqueza y sujeto portador de un proyecto destinado a emancipar a toda la sociedad y liberarla de la explotación y la desigualdad; la idea del colapso, más o menos anunciado, del capitalismo por la vía del estallido de sus propias contradicciones o por la acción conciente de la vanguardia política de la clase obrera y, en general, se redefinieron la mayoría de los fenómenos vinculados a los procesos que envuelven la compleja relación entre estructura material y constitución del ser social, entre economía y política, entre trabajo y conciencia de clase.

La polémica fue particularmente virulenta en el pensamiento social occidental. El estancamiento o el declive y pérdida de representación social de los antiguos partidos comunistas propició la aparición de corrientes *heterodoxas* que, sin renegar de la matriz ideológica que crearon los fundadores del socialismo moderno, cuestionaron algunos temas clave como la construcción y el papel del partido de vanguardia, la relación entre la organización política portadora del mandato revolucionario y el resto de los sectores sociales y, en especial, iniciaron un amplio proceso de análisis acerca de la relevancia y función de aquellas instancias de organización social, que sin adoptar la “forma partido” expresaban los intereses de vastos sectores populares. El entrecruzamiento de demandas

que suelen expresar estos conglomerados sociales amplió el abanico de la discusión. Ya no podía restringirse el tratamiento de lo “popular” a la cuestión salarial, los problemas sindicales, la construcción del partido obrero o las estrategias de asalto al poder. Desde las clases subalternas nacía un mandato que reclamaba por el deterioro, pérdida o ausencia de recursos mediante los cuales se atienden las necesidades básicas de la vida cotidiana. Aunque las demandas específicamente orientadas a los aspectos laborales no desaparecían, se entremezclaban ahora con requerimientos puntuales que escapaban a la fábrica como núcleo central de conflicto. Las peticiones dirigidas a cuestiones como vivienda, transporte, salud, agua potable y luz eléctrica, junto a otras que apuntaban a derribar prejuicios culturales –igualdad de oportunidades; no discriminación por sexo, religión o grupo étnico, etc.– aparecían en un primer plano de la protesta social y comenzaban a ocupar espacios públicos que tradicionalmente habían pertenecido a las agrupaciones políticas o sindicales que, a su vez, expresaban los intereses de los sectores asalariados de la población.

La experiencia argentina: un caso paradigmático

La réplica a este proceso de descreimiento ha sido el surgimiento de liderazgos locales, más conocidos en sus municipios y comunidades y fuertemente ligados a los intereses inmediatos de sus vecinos. La experiencia argentina sirve para ilustrar este fenómeno de conformación de agrupamientos municipales que han logrado, en muchos casos, salir victoriosos en las elecciones para designar a los titulares de las comunas y a los integrantes de los consejos vecinales.

La emergencia de estas fuerzas de raíz municipal reconoce, en Argentina, algunos antecedentes valiosos de *autogestión popular*. En 1981 se inició la ocupación ilegal de terrenos en la zona sur del conurbano de Buenos Aires. Con estos hechos, dio comienzo una nueva modalidad de producción del hábitat y de organización social de los sectores populares (Merklen, 1997). Estas ocupaciones ilegales de tierras se caracterizaron por ser masivas y por el interés de los protagonistas para llevar adelante las tareas de planificar el uso del suelo y el desarrollo futuro del barrio. A partir de criterios autogestionarios, cientos de familias se instalaban en los predios baldíos, trazaban los lotes y las calles con el fin de asignar un terreno a cada familia, dejar espacios libres para las áreas de uso colectivo y construir la red eléctrica, las tuberías de agua potable, los centros de salud y guarderías. Si quisiéramos identificar el aspecto de mayor origi-

nalidad, en este tipo de experiencias, hay que apuntar el particular modo de vincularse con la ciudad que proponen estos nuevos asentamientos. Constituyen un intento de ser reconocidos por las autoridades municipales y, al mismo tiempo, asimilarse al resto del núcleo urbano mediante una política de autoorganización y de hechos consumados (Izaguirre y Aristizábal, 1989).

Es importante señalar un rasgo sustantivo en este tipo de organización autogestiva. Todos los grupos vecinales se construyeron sobre la idea de la autonomía respecto de la competencia político-partidaria. De esta forma, los representantes de los vecinos se definían como “apartidarios” o “apolíticos”. Esta conducta favoreció la unidad organizativa de los barrios, al colocar la competencia política fuera de sus límites y acotar —puertas adentro— las diferencias entre vecinos. Se logró establecer así un límite visible entre las organizaciones sociales, surgidas de demandas específicas de la sociedad civil, y el andamiaje institucional sobre el cual se levanta el sistema político.

Las agrupaciones vecinales que surgieron durante los años ochenta y que se extendieron en los últimos diez años muestran algunos cambios importantes con respecto a las experiencias que se acaban de mencionar. Se mantuvo cierto desdén y suspicacia hacia las dirigencias políticas tradicionales pero, al mismo tiempo, se expresó un abierto interés por disputar electoralmente el control de las comunas (Di Tella, 2001). La señal de identificación común que exhiben las organizaciones vecinalistas sigue siendo la incredulidad que sienten por las antiguas fuerzas políticas y todas coinciden en un aspecto que, en el futuro, puede constituirse en un punto vulnerable: la heterogeneidad de los sectores de población que las conforman. Entre los grupos que confluyen es posible reconocer a trabajadores de la industria, burócratas y comerciantes, técnicos y profesionales, desempleados y subocupados, servidores públicos desplazados o grupos marginales cuyo objetivo principal es obtener un lugar donde vivir. La composición ideológica de las bases sociales del movimiento “vecinalista” es variada. En ciertos casos se encuentran expresiones cercanas a corrientes políticas históricas, como el peronismo y la Unión Cívica Radical; en otros casos, parecen responder a fuerzas conservadoras de confusa procedencia, incluidos grupos que colaboraron con la dictadura militar. No obstante, las agrupaciones vecinales efectúan sus convocatorias con carácter amplio, sin discriminar por posturas ideológicas o antecedentes partidarios. El objetivo político central es jerarquizar el rol municipal, lograr una mayor autonomía de las comunas y procurar que las elecciones en las que se vota para designar a los presidentes municipales y asambleístas, se efectúen de manera separada de las provinciales o federales.

Estas banderas, junto a la prédica machacona contra la corrupción y la inseguridad, constituyen el programa mínimo de la mayoría de estas organizaciones.

El vecinalismo abre un espacio de lucha para la persona desempleada que ya no cuenta con un sindicato al cual llevar sus demandas y lograr que la defienda, y para los trabajadores precarios, los ocupados por cuenta propia, los subempleados, los desplazados de las empresas estatales privatizadas y para aquellos que, aún teniendo una inserción laboral estable, no confían ni se sienten representados por las antiguas estructuras gremiales ni por las ofertas que provienen de los partidos políticos. Desde el Estado se hacen reiterados esfuerzos de cooptación. Durante la última dictadura que gobernó Argentina en el período 1976-1983, se trató de armar lazos con la sociedad luego de los primeros años de terror. Vecinos “reconocidos” de las comunidades eran elegidos para reemplazar a los militares que administraban los municipios. En 1983, con el reestablecimiento de la democracia, algunos decidieron presentarse a elecciones y, con ese fin, crearon sus expresiones vecinales organizadas políticamente.

Durante el gobierno del presidente Carlos Menem (1989-1999), se multiplicaron los programas sociales con el objetivo implícito de conquistar el apoyo de los representantes barriales y afianzar la clientela electoral del Partido Justicialista. En algunas localidades del conurbano bonaerense, se logró fracturar y cooptar a las organizaciones vecinales. En otros casos, el interés ciudadano se mantuvo fiel al acuerdo de “no compromiso” partidario.

El núcleo a partir del cual suelen articular su discurso los movimientos vecinalistas es la exaltación de la figura “del buen vecino”. Por lo general, se trata del ciudadano atraído por los valores que encarnan una “cuidada y austera” administración de los recursos municipales y de la prestación adecuada de los servicios básicos que se esperan de un Estado mínimo (Pavón, 2001). El éxito electoral de los candidatos vecinalistas se explica, en buena medida, por ser receptores del voto popular que desea expresar su rechazo a la política bajo sus formas conocidas. Se entiende que una manera de “despolitizar” el voto es apoyar a un candidato que se presenta como un “buen vecino”, que se hace cargo de la gestión cotidiana de los problemas de su entorno y que se muestra indiferente a la militancia partidaria.

Con palabras simples y sin rodeos, Alberto Groppi –uno de los numerosos jefes comunales surgidos del movimiento vecinalista– define los postulados que inspiran a las organizaciones municipales: “El vecinalismo no tiene una ideología a nivel macro. Es ideología simple, un espíritu de servicio permanente por la

gente que a uno lo rodea”. Otro jefe municipal, Ricardo Ubieta, de la comuna de Tigre señala que

“el corazón del problema está en que se ha roto la relación entre la gente y la política, porque ésta ya no resuelve ninguna de las necesidades cotidianas de los sectores sociales [...] el vecinalismo es la soberanía del bache, de la luz eléctrica, ver cómo prestas mejores servicios y no meterte en los grandes problemas ya que no los vas a solucionar...” (Testimonios citados por, Pavón, 2001).

El auge del “vecinalismo”, a mediados de los años ochenta, coincidió con el surgimiento y multiplicación de las redes solidarias. Un relevamiento, publicado en mayo de 2000, que efectuaron el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), muestra que hay más de 100 mil organizaciones comunitarias en Argentina (Iglesias, 2000). Se trata de entidades de bien público, sin fines de lucro, que se forman con el único propósito de defender las demandas ciudadanas. En el capítulo de conclusiones del documento *Índice de Desarrollo de la Sociedad Civil de la Argentina*, se menciona que estas asociaciones, que nacen sin patrocinio estatal, duplican a las instituciones educativas y son hasta siete veces más numerosas que las de salud.

Otro fenómeno de especial relevancia es la aparición de mercados en los que se adquieren y venden diversos bienes y servicios mediante el sistema de trueque. Estos mercados se iniciaron a mediados de los años noventa, impulsados por miles de trabajadores desempleados y subocupados, como un mecanismo alternativo al sistema formal de comercio. En apariencia, el sistema de trueque no se diferencia de un pacto de compra-venta rutinario, ya que cada artículo tiene un valor en “créditos”. Pero estos billetes no son otra cosa que el valor del trabajo que cada persona aporta: no son intercambiables por dinero, tampoco reemplazan a la moneda corriente ni generan ningún interés. Carlos de Sanzo, uno de los fundadores de la Red Global del Trueque Solidario señala que:

“cualquier club de trueque está en condiciones de darle a un desocupado respuesta a cortísimo plazo: barrer o pintar o, quizá su esposa, atender a un enfermo o preparar comidas [...] el trueque funciona como interfase entre el mercado social y el mercado formal y opera en los intersticios de la economía: con las butacas que quedan vacías en el teatro, con las horas que quedan sin trabajar, con la mercadería que queda sin vender” (Lipovich, 2001).

“El primer club de trueque se fundó en 1994. Hoy son más de 800 y hay 90 mil familias cuyo sustento depende total o parcialmente del trueque [...] sumando casi 500 mil personas.”

Bajo la forma de asociaciones vecinales o mediante este curioso sistema de mercados autogestivos, la sociedad civil busca recomponer lazos de solidaridad que se perdieron con el debilitamiento de las anteriores formas de representación popular. En aquellos espacios donde los sindicatos ya no llegan —el incremento del desempleo, del trabajo precario y de la ocupación domiciliar le restaron bases sociales— y donde los partidos tradicionales dejaron de actuar como grandes agregados de la voluntad “nacionalista-popular”, las demandas de la población se canalizan a través de instancias peculiares que genera la propia sociedad civil.

No obstante, las experiencias autogestionarias y vecinalistas abren múltiples interrogantes. Para la socióloga Maristella Svampa, responsable de la cátedra Simón Bolívar del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Sorbona, los riesgos que enfrentan estos movimientos sociales son muy grandes. Svampa se pregunta: “¿Puede la política convertirse en la sola gestión de los problemas cotidianos de la gente, ignorando las definiciones más generales, que están detrás de las decisiones de más largo plazo y que tienen que ver con la idea de sociedad que tenemos y queremos?” (Citado por, Pavón, 2001). Esta marca identitaria de los representantes del movimiento vecinalista —estar alejados del juego político tradicional— puede transformarse en un rasgo particular que oculte fenómenos generales, al no advertir que la política es una tarea colectiva que se nutre del mundo de los valores y que implica opciones, ideologías y creencias (Svampa, 2000).

Los riesgos que se señalan no descalifican las experiencias de *democracia directa* y autogestión que se describen en este artículo. El vecinalismo es un fenómeno que ha comenzado a crecer en América Latina; prácticas similares a las que se encuentran en Argentina se registran también en Paraguay, Chile, Brasil y Uruguay. Con elementos particulares, dictados por la rudeza del mundo campesino en el que nació, puede incluirse al movimiento de los “Sin Tierra” en Brasil, tal vez lo más logrado en cuanto al impulso de labores productivas y prestación solidaria de servicios educativos y de salud.

Es posible que estas nuevas estructuras no sustituyan a las antiguas y, por el contrario, se articulen con ellas. El desafío que tendrán que resolver será la dificultad de vinculación con formas políticas de mayor alcance, provincial o nacional, sin que se diluyan su especificidad y sus valores. En este afán de crecer

—en Buenos Aires se constituyó el Frente Vecinal Provincial con el fin de competir en las elecciones legislativas de 2001— se anida el riesgo de la fagocitación a partir de acuerdos que establezcan con fuerzas políticas nacionales. Renunciar a las tentaciones de la ideología parece un acto de afirmación de la pureza de las demandas ciudadanas. Sin embargo, puede significar el ingreso a un universo lúdico en el que se repliquen imágenes distorsionadas de la realidad social y de cuyos espejismos sólo se logre salir por el camino de la política.

Las organizaciones piqueteras

El colapso patético de la economía argentina a finales de 2001, que concluyó con el derrumbe del gobierno de Fernando de la Rúa, potenció y puso en el centro del escenario político a las agrupaciones constituidas por trabajadores desempleados. El *movimiento piquetero*, como se lo conoce mediante una expresión coloquial que alude a una de las tácticas de lucha que consiste en formar grupos (piquetes) para cortar el tránsito en rutas y puentes, es —junto a las sociedades vecinales— una de las expresiones de la protesta social más relevantes de ese enorme laboratorio en que se ha constituido la Argentina desde mediados de los años noventa. Estas dos manifestaciones del movimiento urbano-popular presentan particularidades que no los hacen asimilables en toda su dimensión, pero tienen algunos puntos comunes. En ambos casos se percibe el repudio a los agentes estatales, el arraigo y defensa del espacio geográfico y el traslado del conflicto del ámbito laboral a la villa miseria, a las calles o al barrio. Mientras las organizaciones vecinales apuntan sus demandas al logro de servicios básicos, el movimiento piquetero pone en el centro de sus reclamos la ayuda económica y la apertura de nuevas fuentes de trabajo.

Ni el más agudo de los observadores políticos argentinos pudo sospechar que los episodios de violencia callejera que se desarrollaron en Cutral-Có durante la semana del 20 al 26 de junio de 1996 darían lugar a la emergencia de un nuevo y extendido proceso de organización y protagonismo social. Para muchos, encandilados por la intensidad de la pueblada y por el encadenamiento con otros hechos similares, se trataba de una especie de escena típica de los momentos de relevo social, cuando una clase, recién llegada, se apresura a tomar en sus propias manos gestiones de gobierno y actos de interés público que poco antes no podían más que presenciar como lejanos espectadores.

Se trata, en realidad, de un proceso bastante más complejo. Es posible identificar en el movimiento piquetero que arranca en 1996 dos tipos de actores principales que con el tiempo irían adquiriendo formas de organización y prácticas similares. Un primer segmento social que confluye en estas agrupaciones está formado por trabajadores desplazados del aparato productivo como resultado del cierre de antiguas destilerías y pozos petroleros de la empresa pública Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) privatizada primero a favor del grupo nacional Astra y transferida más tarde al *holding* español Repsol. Localidades y municipios que dependían casi exclusivamente de esta industria se quedaron sin empleo y sin ingresos en poco tiempo. En algunos casos las condiciones, de por sí catastróficas, se potenciaron por la cancelación y el levantamiento de ramales ferroviarios, por el cierre de ingenios azucareros, o por la brusca reducción de las dependencias públicas provinciales que expulsaron trabajadores, disolvieron algunos organismos locales o subcontrataron ciertas actividades que eran responsabilidad de los gobiernos locales: mantenimiento de calles y parques, suministro de agua potable y energía, recolección de residuos, así como la instalación y el mantenimiento del servicio telefónico.

La población que fue desplazada como resultado del proceso que se describe tiene algunos rasgos comunes que es necesario señalar, ya que son relativamente recientes en el mercado laboral argentino si se toma como referente el universo del trabajo que estaba vigente en los países capitalistas de Centro y Sudamérica. Algunas de estas notas relevantes son:

a) Relación laboral estable, sancionada por contratos colectivos de trabajo expresamente negociados y suscritos por empresas y sindicatos. Este rasgo explica, en buena medida, la escasa presencia del llamado “trabajo en negro” hasta fines de los años setenta.

b) Acceso de los trabajadores a los sistemas de seguridad social, prestaciones, reconocimientos y premios de acuerdo a criterios fijados en los mismos contratos que normaban las relaciones obrero-patronales.

c) Reconocimiento de la antigüedad como uno de los factores determinantes en los ascensos y movilidad del trabajador dentro de la misma empresa.

d) Estabilidad en el empleo de acuerdo a cláusulas contractuales que establecían condiciones de trabajo por tiempo indefinido y a jornada completa.

e) Organización sindical con fuerte afiliación de las bases obreras e importantes experiencias en huelgas y conflictos reivindicativos.

La pérdida, parcial o total de éstas, y otras prestaciones que moldearon el perfil proletario de la sociedad argentina, fue uno de los principales detonantes del movimiento piquetero en aquellas provincias en las que el petróleo, el carbón, la burocracia local o el ferrocarril habían constituido el núcleo de la vida económica y social de infinidad de pueblos y municipios del interior de la república.

La insurgencia social que se expresa casi en esos mismos años en las localidades del Gran Buenos Aires y en algunos barrios de la propia Capital Federal tiene aristas diferenciadas con respecto al tipo de población que se mencionó en los párrafos precedentes. En este caso la precariedad ocupacional, las condiciones de pobreza y desprotección son más acentuadas. Es relativamente menor el número de trabajadores expulsados del sector formal de la economía y mucho más elevado el segmento de personas y familias que laboran de manera esporádica en franjas de la economía que fueron particularmente castigadas como la industria de la construcción, la textil y del vestido o las curtiembres y antiguos frigoríficos que cerraron sus puertas o cambiaron de manos durante el gobierno de Carlos Menem. Esta calidad de trabajador precario de larga data potenció las demandas por alimentos y viviendas y generalizó la necesidad de producir con sus propias manos lo que el Estado dejaba de brindar, en especial salud y educación gratuita.

Con el fin de evitar ciertos debates bizantinos, a los que se hizo referencia en el primer apartado de este artículo, es conveniente apuntar que la temática de carácter específicamente laboral no desaparece en ninguno de los casos mencionados, pero pierde centralidad en los programas reivindicados frente a necesidades cotidianas que resultan agobiantes como la alimentación, la regularización de la tenencia de terrenos y viviendas y la atención de la salud.

Organización, perfiles políticos y formas de lucha

El movimiento piquetero constituye un agregado heterogéneo de sectores de población que no encuentran ni en los partidos políticos tradicionales ni en los sindicatos una vía de expresión genuina de sus demandas más sentidas. No obstante, esta desconfianza hacia las formas convencionales de la política no excluye simpatías o rechazos, hacia determinados líderes o fuerzas partidarias constituidas con antelación a la emergencia de los grupos piqueteros.

Existe un factor de competencia implícita que es necesario apuntar, se trata de la relocalización de los ámbitos en los que se desenvuelve el conflicto. La calle y la fábrica –históricos espacios de manifestación de lo “popular” a través de los sindicatos– han sido parcialmente desplazados por el territorio, el barrio, la olla popular, las tareas solidarias y el trabajo eventual desprotegido. La familia y el papel sobresaliente del aporte femenino le dan nuevos contenidos y plantean de hecho una puja por la conducción de los actos, marchas, cortes de rutas y por el manejo de la interlocución con las autoridades. (López Echagüe, 2002; Cafassi, 2002; MTD-Colectivo Situaciones, 2002; Lucita, 2001).

En este punto es conveniente hacer una identificación de las principales organizaciones piqueteras y de las técnicas de lucha más difundidas.

Vinculadas con la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), se encuentran la Federación Tierra y Vivienda (FTV) que dirige Luis D’Elia, antiguo concejal por el Frepaso y actual diputado por el Frente para el Cambio y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que orienta Juan Carlos Alderete. D’Elia, que se inició como militante laico de las comunidades cristianas de base, defiende la necesidad de mantener y hacer compatibles las expresiones callejeras de protesta con los mecanismos de diálogo que posibilitan alcanzar algunos acuerdos con las autoridades, en particular con los titulares de aquellas dependencias públicas responsables de instrumentar los programas sociales. De esta forma, se logró controlar los antiguos “Planes Trabajar” y administrar las actuales ayudas de 150 pesos mensuales que se otorgan por medio de los planes para “Jefas y Jefes de Hogar”. En cuanto a las técnicas de acción directa, estas agrupaciones defienden la eficacia de los cortes parciales de rutas, de manera tal que se mantengan abiertas las vías para el paso del transporte colectivo y se permita el tránsito de los automóviles, con lo que se procura cancelar una fuente de discordia con sectores de la clase media que acuden a trabajar a la ciudad de Buenos Aires.

Las otras dos instancias organizativas con fuerte presencia militante tienen una actitud más beligerante. En la Coordinadora Aníbal Verón confluyen el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) y la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD) entre otras agrupaciones de desempleados y organismos vecinales. Estos grupos sostienen una posición de marcado repudio a las instituciones oficiales y rechazan los procesos electorales, aunque aceptan la ayuda económica que otorga el gobierno nacional a los jefes de familia que no tienen trabajo.

Por su parte, el Bloque Nacional Piquetero es el espacio de encuentro común para un abanico de organizaciones tan heterogéneas como las que responden a la orientación de la Coordinadora A. Verón. En el Bloque es posible encontrar al Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) que logró una consolidada implantación social en las barriadas más pobres del municipio de Florencio Varela; el Movimiento Sin Trabajo (MST); el Polo Obrero (PO) y el Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados. Aunque en sentido estricto, los animadores del Bloque Piquetero son el MTR y el PO, cuya práctica agitativa y movilizadora –con cierto grado de violencia– ha provocado algunas divergencias y reclamos de parte del resto de las organizaciones.

De los tres agrupamientos mencionados, la Coordinadora Aníbal Verón y el Bloque Piquetero sostuvieron las posiciones más intransigentes con respecto al proceso electoral que se celebró el 27 de abril de 2003 y con relación a posibles acuerdos y alianzas con las fuerzas políticas tradicionales y con los sindicatos. El rechazo se extiende también a la combativa CTA que dirige Víctor De Gennaro. Ni siquiera la actitud negociadora y el afán de concertar del presidente Néstor Kirchner han logrado modificar la posición beligerante de esta corriente. Dos importantes referentes del MTD, Jorge Jara y Andrés Fernández expresaron, en una entrevista concedida al diario *Página/12* (Gilio, 2002) que no están dispuestos a promover acuerdos con los partidos políticos ni con las estructuras sindicales formalmente constituidas. Como para despejar cualquier duda, Andrés Fernández sepulta toda posibilidad de alianzas cuando afirma: “Nosotros somos un movimiento de trabajadores desocupados donde planteamos la autonomía y la independencia de todos los sectores sindicales, burócratas, con todas las instituciones que están relacionadas con el gobierno y con los partidos políticos” (Gilio, 2002).

El movimiento piquetero está trazando una experiencia de lucha de incalculable valor social. No es un conflicto impulsado por trabajadores ocupados con afiliación sindical, por el contrario, proviene de sectores con marcadas desventajas por su condición de obreros desempleados que pueden, como ellos dicen, cortar las rutas pero no la producción, personas con ocupación temporal, amas de casa y jóvenes sin escuela y sin oficio. La raquíta ayuda económica de 150 pesos que otorga el Estado es insuficiente para cubrir las necesidades mensuales de grupos familiares en los que el jefe o jefa del hogar está sin trabajo o sólo se ocupa temporalmente en tareas que no existen para las autoridades laborales y que no están registradas en los sistemas de seguridad social. No obstante, la

capacidad de movilización y la disposición para demandar el apoyo del Estado en servicios básicos no disminuyó. Puede ilustrarse la dinámica de los conflictos que protagonizaron las agrupaciones piqueteras reproduciendo un cuadro que elaboró el equipo de diario *Clarín* (Young, Guagnini y Amato, 2002) que realizó una minuciosa investigación testimonial sobre el movimiento de los trabajadores desocupados. De dicha nota tomamos el siguiente cuadro:

Piquetes por provincia

Provincia	1997-1998	1999-2000	2001-2002 *
Buenos Aires	32	201	874
Jujuy	50	80	466
Capital Federal	20	109	331
Salta	4	43	208
Córdoba	23	15	168
Tucumán	7	71	115
Santa Fe	13	34	125
Neuquén	17	62	92
Chaco	2	28	119
Río Negro	1	23	88
Mendoza	2	10	97
Catamarca	0	8	86
Entre Ríos	3	20	35
Misiones	3	3	41
Corrientes	1	22	17
San Juan	1	9	30
Chubut	5	8	16
La Rioja	3	1	25
Formosa	0	4	18
Santa Cruz	3	6	11
Santiago del Estero	0	0	14
Tierra del Fuego	1	4	8
San Luis	0	2	6
La Pampa	0	3	2
Total	191	766	2992

Fuente: *Clarín*, Buenos Aires, 2/9/02.

* Cifras del período enero-junio 2002

Bajo la forma de asambleas barriales, cabildos abiertos o comités de delegados, las agrupaciones piqueteras discuten las tareas de la semana y programan las acciones del mes: cortes de rutas, marchas a la Plaza de Mayo, entrevistas con funcionarios y coordinación con otras organizaciones. Sirve el ejemplo del barrio San Pedro de La Matanza donde se reúnen los representantes de más de 1500 familias de las que el 70 por ciento son encabezadas por hombres o mujeres desocupadas. La agenda de la asamblea incluye diversos temas entre los que cabe destacar:

- ◆ La reconversión de los viejos “Planes Trabajar” en los nuevos subsidios “Jefas y Jefes de Hogar”.
- ◆ Información sobre los planes que no se pagan con argumentos inventados por algún funcionario público.
- ◆ La falta de envío de alimentos y de las becas para niños y jóvenes en edad escolar.
- ◆ Análisis de los próximos planes de lucha –cortes de rutas y puentes, marchas al centro de Buenos Aires– con el objetivo explícito de repudiar alguna medida gubernamental o reclamar por el incumplimiento de las promesas efectuadas por el gobierno nacional o provincial.

Un primer balance de la vasta experiencia colectiva de organización y lucha de los grupos sociales más golpeados por las políticas de reestructuración del capitalismo argentino arroja resultados esperanzadores. Estamos en el inicio de un proceso de recomposición del tejido social y de las redes de solidaridad que fueron destruidas cuando el programa de privatizaciones y de “achicamiento” del antiguo Estado industrialista excluyó del mercado laboral y del consumo a millones de argentinos. No obstante, persisten tensiones y dilemas que deben formularse ahora, iniciar su análisis y procurar avanzar en su resolución antes de que el movimiento piquetero quede encerrado en un brete que lo obligue a replegar sus acciones al plano puramente reivindicativo, o bien apostarle a un cambio profundo, de largo plazo y de carácter socialista, que lo ahogue en demandas maximalistas de difícil cumplimiento.

En buena medida, el pico más alto de conflictividad social y el logro de formas organizativas más coordinadas y extendidas desde Jujuy hasta La Matanza y Florencio Varela guarda una relación directa con la instrumentación de medidas económicas extremas. Estas políticas se expresaron crudamente en el recorte presupuestal y la reducción del gasto público orientado a la educación y la salud.

El fenómeno vecinalista y piquetero ha demostrado poseer un impulso social y un referente simbólico propio que no se agota con el comportamiento cambiante del ciclo económico. Sin embargo, es necesario incorporar en la agenda del movimiento popular algunos temas nodales que deben discutirse ahora, al calor de las movilizaciones y de la confrontación con el Estado. La lista de puntos de tensión incluye, entre otros, las cuestiones que se mencionan:

a) La relación –acuerdos puntuales, alianzas estratégicas o abierto repudio– con las fuerzas políticas tradicionales, incluidas las de izquierda y el peligro, siempre manifiesto, de las acciones de cooptación que llevan a cabo los punteros barriales y líderes intermedios de los partidos que procuran ganarlos como base electoral.

b) El trato con sectores de la clase media que se molestan por los cortes de rutas pero que ayudan con alimentos y manifiestan simpatías por las marchas piqueteras cuando el eje de la convocatoria incluye críticas al “corralito” y a las políticas económicas recesivas.

c) Las negociaciones con los representantes del Estado que exigen tacto político y propuestas viables en el corto y mediano plazo.

d) La actitud frente a los procesos electorales. De no producirse un golpe militar, el calendario institucional seguirá cumpliéndose y frente a cada coyuntura de elección de autoridades mediante el voto, las organizaciones barriales y piqueteras se verán en la obligación de fijar una posición clara ante sus bases (abstención, opción por algún partido, constitución de un agrupamiento propio, etc.).

e) Los dos puntos anteriores ponen en el centro del debate un tema más amplio, que abarca al conjunto de la sociedad y al propio aparato del Estado: la degradación de la práctica política y la transformación del discurso en un fenómeno mediático, que potencia los factores de encubrimiento de la realidad social y deja sin efecto la confrontación de ideas y proyectos, con lo cual pierden eficacia –y se debilitan como mecanismos de representación social– los dispositivos que sostienen la democracia parlamentaria (Pucciarelli, 2002).

Qué nos queda por sugerir ante el panorama que se analiza en este ensayo. ¿Cambiar el mundo sin tomar el poder?, como propone John Holloway. La idea resulta atractiva como hipótesis de estudio para el largo plazo, pero suena a expresión de deseo juvenil o a consigna ácrata de finales del siglo XIX, cuando se la valora a la luz del acontecer político cotidiano. De todas formas, habrá que dejar que la historia y la voluntad de los hombres digan la última palabra.

México, D.F., agosto del 2003

América Latina

El empleo no agrícola en la economía no estructurada y estructurada en una selección de países (porcentajes de la fuerza de trabajo)

		Economía no estructurada				Economía estructurada
		Total	Trabajo por cuenta propia	Servicio doméstico	Micro-empresas	Total
Argentina	1990	47,5	24,7	7,9	14,9	52,5
	1996	53,6	27,1	7,8	18,7	46,4
Bolivia	1990	56,9	37,7	6,4	12,8	43,1
	1996	63,1	39,8	5,5	19,9	36,9
Brasil	1990	52,0	21,0	7,7	23,3	48,0
	1996	59,3	25,8	9,5	26,0	40,7
Chile	1990	49,9	23,6	8,1	18,3	50,1
	1996	51,9	22,7	6,8	21,4	48,1
Colombia	1990	55,2	23,5	5,4	26,3	44,8
	1996	57,2	25,9	3,8	27,5	42,8
Costa Rica	1990	42,3	18,1	5,8	18,4	57,7
	1996	47,2	17,9	5,2	24,6	52,6
Ecuador	1990	51,2	32,5	5,6	13,0	48,8
	1996	52,9	32,8	5,9	16,2	46,2
México	1990	55,5	30,4	5,6	19,5	44,6
	1996	60,2	32,5	5,4	22,3	39,8
Panamá	1990	40,5	20,4	7,2	12,8	59,5
	1996	43,6	20,7	7,0	13,9	57,3
Paraguay	1990	61,4	21,2	10,7	29,4	38,6
	1996	67,9	26,9	10,0	32,0	31,1
Perú	1990	51,8	35,3	5,1	11,4	48,2
	1996	58,0	37,4	4,2	16,3	42,1
Uruguay	1990	36,3	19,3	6,0	11,0	63,7
	1996	38,9	21,3	6,3	11,3	60,1
Venezuela	1990	38,8	22,1	4,1	12,6	61,2
	1996	47,7	28,1	2,4	17,2	52,3

Fuente: OIT, *Informe sobre el Empleo en el Mundo 1998-1999*, Ginebra, 1998.

Bibliografía

Aglietta, Michel, (1982) *Regulación y Crisis del Capitalismo*, México, Siglo XXI Editores.

Amin, Samir, (1994) *Postfordismo*, Oxford, Blackwell.

Antunes, Ricardo, (1999) *¿Adiós al Trabajo?*, Buenos Aires, Editorial Antídoto. Acerca de los cambios operados en el mundo del trabajo y refutando las teorías sobre el fin de las actividades laborales, este autor sostiene que

“se observa un proceso múltiple: por un lado se verificó una desproletarización del trabajo industrial en los países capitalistas avanzados, con mayor o menor repercusión en las áreas industrializadas del Tercer Mundo [...] hubo una disminución de la clase obrera industrial tradicional. Pero, paralelamente, se efectuó una notoria expansión del trabajo asalariado [...] en el sector de servicios [...] se percibe igualmente una subproletarización intensificada [...] en la expansión del trabajo parcial, temporario, precario, subcontratado, tercerizado.” p. 43.

Boyer, Robert, (1989) *La Flexibilización del Trabajo en Europa*, Madrid, Ministerio del Trabajo.

Braverman, Harry, (1974) *Trabajo y Capital Monopolista*, Nuestro Tiempo, México.

Cafassi, Emilio, (2002) *Olla a presión*, Buenos Aires, Libros del Rojas, UBA.

Castell, Robert, (1996) “Trabajo y Utilidad para el Mundo”, en *Revista Internacional del Trabajo*, Ginebra, OIT, n° 6, vol. 115.

Castells, Manuel y Aoyama, Yuko, (1994) “Hacia la Sociedad de la Información. Estructura del Empleo en los Países del G-7 de 1920 a 1990”, en *Revista Internacional del Trabajo*, Ginebra, OIT, n° 1, vol. 113. En este estudio los autores destacan el carácter heterogéneo del proceso de expansión de las actividades de servicios en los distintos países, así como la implantación desigual de las economías basadas en núcleos productivos que se apoyan en una “gran densidad de información y conocimientos.”

Di Tella, Torcuato, (2001) “Los síntomas de cierta ebullición”, en *Clarín*, Buenos Aires, 22 de abril.

Gilio, Esther, (2002) “Jorge Jara y Andrés Fernández, piqueteros del MTD. El poder se construye”, Buenos Aires, en *Página/12*, 14 de octubre.

Gorz, André, (1982) *Adiós al Proletariado*, Barcelona, El Viejo Topo.

_____, (1998) *Miserias del Presente. Riqueza de lo Posible*, Buenos Aires, Paidós.

Habermas, Jürgen, (1984) *The Theory of Communicative Action*, Boston, Beacon Press.

Handy, Charles, (1987) *El Futuro del Trabajo Humano*, Buenos Aires, Editorial Ariel.

Hardt, Michael y Negri, Antonio, (1994) *Labor of Dionysus*. Minnesota, University of Minnesota Press.

Hyman, Robert y W. Streeck (editores), (1988) *New Technology and Industrial Relations*, Oxford Basic Blackwell.

Iglesias, Mariana, (2000) “Cada vez hay más redes solidarias en el país”, en *Clarín*, Buenos Aires, 26 de agosto.

Izaguirre, Inés y Aristizábal, Zulema, (1989) *Las tomas de tierras en la zona sur del Gran Buenos Aires. Un ejercicio de formación de poder en el campo popular*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.

Jurgens, U., (1995) “Shaping the Future of Work”, en *British Journal of Industrial Relations*, n° 33, vol. 4, diciembre.

Katz, H. C. y Sabel, Charles, (1985) “Industrial Relations and Industrial Adjustment in the Car Industry”, en *Industrial Relations 24-2*, Cornell University.

Lindenboim, Javier (comp.), (1999) *El Desafío del Empleo a Finales del Siglo XX*, Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, UBA, Cuadernos del CEPED n° 2. De este material provienen algunas de las valoraciones que se incluyen en este ensayo sobre el comportamiento del empleo en Latinoamérica. Se revisó de manera particular la ponencia de Víctor Tokman, “Panorama del Empleo en América Latina” y las conferencias de Silvia Montoya y Claudio Lozano: “Mercado de Trabajo y Política Económica. Perspectivas.”

Lipcovich, Pedro, (2001) “El trueque, un fenómeno que crece con la depresión de la economía”, en *Página/12*, Buenos Aires, 26 de marzo.

Lipietz, Alain, (1986) “Acumulación, Crisis y Salidas a la Crisis: Algunas Reflexiones Metodológicas en torno a n° 11, mayo-agosto.

López Echagüe, Hernán, (2002) *La política está en otra parte*, Buenos Aires, Grupo Editorial Norma.

Lucita, Esteban, (2001) “Cortando rutas, abriendo nuevos senderos. Desocupados, ocupados, piqueteros, viejas y nuevas formas de lucha”, Buenos Aires, *Cuadernos del Sur 32*.

Mallet, Sergio, (1972) *La Nueva Clase Obrera*, Madrid, Tecnos.

Méda, Dominique, (1996) “El Valor Trabajo Visto en Perspectiva”, en *Revista Internacional del Trabajo*, Ginebra, OIT, n° 6, vol. 115.

Merklen, Denis, (1997) “Organización comunitaria y práctica política. Las ocupaciones de tierras en el conurbano de Buenos Aires”, en *Nueva Sociedad*, Caracas, n° 149, mayo-junio.

Monza, Alfredo, (2000) “Sobre la Profecía del Fin del Trabajo”, en *Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo*, Buenos Aires, ALST, Año 6, n° 11.

MTD-Colectivo Situaciones, (2002) *Más allá de los piquetes*, Buenos Aires, Ediciones de Mano en Mano.

Offe, Claus, (1990) *Contradicciones en el Estado de Bienestar*, México, CONACULTA / Alianza Editorial.

_____, (1985) *Disorganised Capitalism*, Cambridge, Polity Press.

OIT, (1996) *El Empleo en el Mundo 1996/97. Las Políticas Nacionales en la Era de la Mundialización*, Ginebra.

OIT, (1997) *América Latina y el Caribe, Informa*, Ginebra, n° 4, diciembre.

OIT, (1998) *América Latina y el Caribe, Informa*, Ginebra, n° 5, primera edición del año. Los datos que se incluyen en el texto fueron tomados de los reportes de la OIT que se citan. Se eligieron aquellas referencias que se consideran más ilustrativas de la situación actual del empleo y de algunas tendencias que demuestran cierta continuidad en el comportamiento de los mercados de trabajo de la región.

Pavón, Héctor, (2001) “Los partidos que vienen de los barrios”, en *Clarín*, Buenos Aires, 22 de abril.

Pérez, Carlos y Ominami, Carlos (comp.), (1987) *La Tercera Revolución Tecnológica*, Buenos Aires, Paidós.

Pucciarelli, Alfredo, (2002) *La democracia que tenemos*, Buenos Aires, Libros del Rojas, Serie Extramuros, UBA.

Sabel, Charles, (1985) “Historical Alternatives to Mass Production”, en *Past and Present*, Cambridge U. Press, n° 108.

Svampa, Maristella (edit.), (2000) *Desde abajo. La Transformación de las Identidades Sociales*, Buenos Aires, Editorial Biblos.

Touraine, Alain, (1989) *América Latina. Política y Sociedad*, Madrid, Espasa Calpe.

Young, Gerardo, Guagnini, Lucas y Amato, Alberto, (2002), “Piqueteros”, *Clarín*, Buenos Aires, 1, 2, 3 y 4 de septiembre.